



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Hospital Pablo Tobón Uribe
Demandado	Nueva EPS
Radicado	05001 31 03 008 2021 00161 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No 57
Decisión	Revoca
Tema	Excesiva formalidad para admitir demanda
Subtema	<p>Prevalencia del derecho sustancial.</p> <p>...Vistas así las cosas, se tiene que proceder de la forma como lo hizo el <i>a quo</i>, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “<i>summus jus, summa injuria</i>”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.</p> <p>No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un «<i>excesivo ritual manifiesto</i>» que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.</p>

TRIBUNAL SUPERIOR

2021-068

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, tres (3) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante frente al auto del 22 de junio de 2021 que rechazó la demanda por no haberse subsanado las exigencias pedidas en auto inadmisorio.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, se presentó demanda ejecutiva instaurada por el Hospital Pablo Tobón Uribe en contra de la Nueva EPS, S.A. pretendiendo se librara orden de pago en favor de la ejecutante y en contra de la entidad demandada por las sumas líquidas de dinero, correspondientes al saldo insoluto de las facturas de venta libradas con ocasión de los servicios de salud prestados a sus afiliados (cotizantes y beneficiarios), en el servicio de urgencias, y demás servicios médico-asistenciales necesarios hasta su orden de alta o remisión.

2. El juez de conocimiento, por auto del 2 de junio último, inadmitió la demanda exigiendo:

“...1. Aportar los originales de las facturas objeto de ejecución, en el presente proceso, de conformidad con lo estipulado en el numeral 11° del artículo 82 del C.G.P., en armonía con lo dispuesto en los artículos 619 y 624 del Código de Comercio. Atendiendo que se trata de 563 facturas, deberá allegarlas de forma consecutiva y relacionada.

2. Teniendo en cuenta que las facturas presentadas para el cobro, carecen de fecha de vencimiento, y conforme al artículo 774 numeral 1° del Código de comercio, que dispone “La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión”, la parte demandante deberá aclarar las pretensiones contentivas de los intereses de mora de acuerdo a la norma citada.

3. Dado que a partir de la factura FH1491194 (Pretensión 559 y ss) los archivos pdf allegados no se encuentran organizados y están en diferentes archivos, la parte demandante deberá organizarlos conforme a la secuencia de las pretensiones y

habrá de unificarlos, para un mejor estudio y comprensión de la demanda y de los títulos valores objeto de ejecución.

4. Dará cumplimiento al inciso 2° del artículo 8° del Decreto 806 de 2020, esto es, deberá informar bajo la gravedad del juramento, que la dirección electrónica suministrado de los demandados, corresponde al utilizado por las personas a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

5. Indicará las empresas ACIEL COLOMBIA SOLUCIONES INTEGRALES y IQ OUTSOURCING MEDELLÍN, qué vínculo legal o contractual tiene con la entidad demandada, toda vez que, la mayoría de las facturas allegadas, se encuentran con el sello de recibido de éstas y no de la NUEVA EPS S.A.

6. En el escrito de la demanda, informa el demandante que en el enlace que transcribe en el acápite de “DEMANDA, PRUEBAS Y ANEXOS EN MEDIO DIGITAL” (Sic), se encuentra la medida cautelar, no obstante de la revisión no se observa la solicitud de la medida, y en consonancia con el numeral 3 de esta providencia, deberá allegarlo en escrito separado y de manera organizada para efectos de su estudio y admisibilidad...”

3. El mandatario judicial de la parte demandante pretendió subsanar las falencias exigidas, allegando escrito aduciendo subsanar uno a uno los requisitos pedidos.

4. El a quo consideró que no se cumplió con las formalidades requeridas en auto inadmisorio, y procedió a rechazar la demanda, en auto del 22 de junio último en el que adujo:

“...El día 15 de junio de 2021, la parte actora, arrima al Juzgado, los títulos valores en original correspondiente a 563 facturas, así mismo radica dos memoriales, uno contentivo del lleno de requisitos (13 folios) y otro de solicitud de medidas cautelares (fls 20 folios)

Dichos memoriales como se advirtió fueron allegados de manera física, por lo que el Despacho procedió a su escaneo, teniendo en cuenta que el presente expediente es digital, conforme a las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura. De la lectura del escrito de lleno de requisitos, se observa que solo fueron subsanados los numerales 1, 4, 5 y 6, dejando sin subsanar los numerales 2 y 3. Del requisito exigido en el numeral 2, es notorio que los intereses de mora en la forma solicitada en la demanda no cumplen con lo dispuesto en el artículo 774 numeral 1° del Código de Comercio, y es por ello que el despacho la requirió para que aclarara dicha pretensión. No obstante, la entidad demandante ninguna aclaración realiza y simplemente insiste en que se libre mandamiento en la forma pedida.

Por su parte, al tratarse de 563 facturas, el Despacho en la revisión exhaustiva de éstos, procedió a exigir a la parte actora para que allegara las facturas en pdf de manera organizada y conforme a la secuencia de las pretensiones, con el fin de

tener un mejor estudio de éstos, ya que los allegados se encuentran de manera irregular. No obstante, la parte demandante allegó el escrito de los requisitos de manera física, pese a que desde el pasado 21 de julio de 2020, la rama judicial ha fomentado el trabajo digital a través de la expedición del “PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, DIGITALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES” debido a la emergencia por el COVID 19, por lo que se optó por la modalidad de preferente de trabajo en casa.

La organización del expediente digital, debe ser igual a la organización al que se manejaba con el expediente físico, en aras de evitar errores, que conlleve a dilaciones procesales. En conclusión, teniendo en cuenta que la parte demandante no realizó la subsanación de manera completa de los requisitos exigidos por el Despacho, procederá a rechazar la demanda y ordenar la devolución de los títulos valores aportados en original...”

4. inconforme con la decisión el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos planteados en la demanda y en el escrito de lleno de requisitos, y agregando:

“..Por lo anterior, no es cierto que la parte demandante no dio cumplimiento a los requerimientos efectuados por el A-quo en el auto que inadmitió la demanda, pues en el escrito de subsanación se realizó una manifestación expresa respecto de cada uno de los requerimiento, y la respuesta a las solicitudes efectuadas por el Despacho, fue una explicación sobre la forma de radicación de las facturas aportadas con la demanda, ya que la misma se efectuó a través de documentos denominados “relación de envío”, que corresponde a un documento que relaciona varias facturas y en el que la EPS impuso el sello que da cuenta de su radicación y respecto de otras facturas se expidió el documento denominado “CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN AL PROCESO DE AUDITORIA GENERAL”, en donde constata el número de la factura radicada, la fecha de radicación y su valor.

Una vez radicada la factura, para el responsable del pago, inicia el computo de los siguientes términos: - El pago anticipado del 50% del valor de la facturación, dentro de los 5 días siguientes a la radicación (literal d), artículo 13 de la ley 1122 de 2007). - La formulación de glosas o devoluciones a la facturación dentro de los 20 días hábiles siguientes a la radicación (artículo 13 de la ley 1122 de 2007 y 23 de la ley 4747 de 2007) – El pago del 50% del restante del valor de la facturación, dentro de los 30 días siguientes a su radicación (literal d), artículo 13 de la ley 1122 de 2007).

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Salud en Concepto No. 35417 del 2014, adujo que: “En cuanto a la aceptación de la factura, considera esta oficina que se debe aplicar lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 1122 de 2007 y 23 del Decreto 4747 de 2007, en cuanto a que la Entidad Responsable del Pago cuenta con 30 días a partir de la presentación de la factura para informar las Glosas o las Devoluciones a las que haya lugar,

transcurridos los cuales sin que se presenten objeciones la misma se entiende aceptada y debe ser pagada.”

Con fundamento en lo anterior, las pretensiones, en lo relacionado con los intereses de mora, se efectuaron teniendo en cuenta los 30 días a partir de la radicación de la factura, para ilustrar al Despacho sobre el particular, me permito referirme a la pretensión 2 que sobre el particular se formuló

“1. \$ 297.119, saldo insoluto de la factura de venta de servicios de salud número FH694974, presentada para su pago el día 2 diciembre 2015, mediante relación de envío número RV-164176.

2. Por los intereses moratorios de la suma anterior, a la tasa máxima legal permitida, desde el 1 enero 2016, fecha en que se hizo exigible la factura y hasta que se verifique su pago.”

En el ejemplo tenemos que la relación envío a través de la que se radicó la factura FH694974 tiene sello de radicación el día 2 de diciembre de 2015, por lo que en la pretensión sobre los intereses moratorios se solicitó al Despacho decretar los mismos desde el 1 de enero de 2016, esto es, una vez transcurrieron los 30 días con que contaba la responsable del pago para efectuar glosas o devoluciones, so pena de que se entienda aceptada y deba ser pagada.

De la revisión de las facturas y los documentos a través de los cuales se realizó la radicación de estas, es claro que las pretensiones relacionadas con los intereses moratorios se efectuaron de conformidad con la normatividad aplicable y en consecuencia no había lugar a modificación alguna.

Respecto del requerimiento efectuado en el numeral tercero del auto que inadmitió la demanda, se señaló al Despacho que las facturas obrantes en el escaner con el que se radicó la demanda y las físicas radicadas con el escrito de subsanación, se encuentran en el mismo orden señalados en los hechos y pretensiones de la demanda.

Así las cosas, y atendiendo a que la parte demandante si subsanó en debida forma los defectos advertidos por el Despacho en el auto que inadmitió la demanda, se deberá revocar el auto que rechazó la demanda y en su lugar librar el mandamiento de pago solicitado y decretar las medidas cautelares radicadas.

II. CONSIDERACIONES

1 El asunto que ahora concita la atención de la Sala es manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo por llamarlo de alguna manera y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad

sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este Magistrado en época pretérita¹, y no se trata de un asunto que haya tenido venero en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse. En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, más conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:

“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones, deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.

En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:

“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula” (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.

2. El legislador de 1970 no olvidó tan sabia directriz del C. Judicial, de ahí el contenido del artículo 4º del decreto 1400,

¹ Aclaración de voto. Nro 5. Medellín, 13 de abril de 2007. Ordinario de GASPAR ALEMANY FERRER contra BEATRIZ ELENA y MARISOL PARRA CARDONA. M.P. MARÍA E. PUERTA M. Rdo. 05360 31 002 2004 00187 01

Código de Procedimiento Civil y nuevamente plasmado por el Constituyente en el artículo 228 de la Carta Política, que si bien no tiene la entidad suficiente de eliminar la requisitoria mínima de los escritos mediante los cuales se acude a los tribunales, la que se cumple una vez se acató la exigencia inadmisoria, como se verá a continuación, sin que sobre señalar que el artículo 11 del C. General del proceso, insiste en que: *“Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.”*

3. La iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de esta con una sentencia inhibitoria. Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem.

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario será inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco

(5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib., pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción.

Es así como consagra el artículo 90 del Código General del Proceso los requisitos que debe contener toda demanda, en lo pertinente:

"Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda sólo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
 - 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
 - 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
 - 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
 - 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
 - 6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
 - 7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*
 - 8. En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo.*
- Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza."*

La norma es específica al establecer "sólo en los siguientes casos", es decir, que las causales son de naturaleza restrictiva pues lo que quiso el legislador con el nuevo estatuto procesal, fue garantizar la tutela judicial efectiva, esto es, que el ciudadano pudiera acudir sin ninguna traba ante el juez para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses.

Sobre el tema dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-833 de 2002 se pronunció:

“No obstante, la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos constitucionales de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalizadas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996)”

4. El a quo inadmite la demanda y exigiendo varios requisitos, procediendo el apoderado de la entidad ejecutante a cumplir una a una tal exigencia, no solo a señalarlos en escrito aparte, sino a integrarlos en nuevo texto de demanda, siguiendo las directrices trazadas por el juez en auto inadmisorio, lo que, en su criterio, no colmaba su requisitoria, concretamente, las exigencias pedidas en los numerales 2, y 3.

Frente a la exigencia del numeral 2, dijo el juez, que era notorio que los intereses de mora en la forma solicitada en la demanda no cumplían con lo dispuesto en el artículo 774 numeral 1° del Código de Comercio, y que, por esa razón, se requirió a la parte demandante para que aclarara dicha pretensión, pero que, al no haberlo hecho en la forma pedida, imponía su rechazo. Pero si el a quo consideraba que en este punto no le asistía razón al demandante, no puede pasar por alto que el artículo 430 del C. General del Proceso señala que el mandamiento de pago ordena al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida o en la que el juez considere legal, por lo que tal exigencia se tornaba innecesaria.

Con respecto a la exigencia pedida en el numeral 3° dijo el juez, que por tratarse de 563 facturas, se exigió a la parte actora para que allegara las facturas en pdf de manera organizada y conforme a la secuencia de las pretensiones, con el fin de tener un mejor estudio de éstos, ya que los allegados se encontraban de manera irregular, pero que no obstante, la parte demandante allegó el escrito de los requisitos de manera física, pese a que desde el pasado 21 de julio de 2020, la rama judicial había fomentado el trabajo digital, debido a la emergencia por el COVID 19, por lo que se optó por la modalidad de preferente de trabajo en casa, y por ello procedió al rechazo.

5. De la revisión del nuevo escrito introductor se extrae que en lo que concierne al requisito pedido en el numeral 2, la parte demandante procedió de manera clara y precisa a explicar el porqué de la fecha a partir de la cual se estaban cobrando los intereses de mora, para lo cual indicó:

“... Es necesario poner de presente al Despacho que la radicación de estas facturas se realizó a través de la radicación de documentos denominados “relación de envío”, que contiene una descripción de varias facturas, pues esta es la forma establecida por el responsable de pago para la radicación de las facturas.

A modo de ejemplo, me permito ilustrar al Despacho sobre lo recién mencionado: A folio 38 se encuentra la relación de envío No. 164176, con sello de radicación impuesto por la demandada NUEVA EPS S.A. el 2 de diciembre de 2015, documento en el que se señala: “Atentamente nos permitimos remitirles la relación de envío 164176, que incluye las siguientes facturas por los servicios prestados a sus pacientes

FH694974 HIJO DE PAOLA ANDREA LEÓN MURIEL 1,909,544 (...)”

En el cuadro inserto en el hecho 10 de la demanda, se indica claramente: (i) relación de envío, (ii) número de factura, (iii) fecha de radicado, (iv) valor de la factura, y (v) saldo por pagar.

En concordancia con lo anterior, véase como con la relación de envío No. 194882 (folio 42) se radicaron catorce (14) facturas, que se encuentran relacionadas y discriminada en dicho documento, y a las que les es común la fecha de radicación 18 de mayo de 2016, pues se reitera, la demandada solo impone sello al documento denominado “relación de factura” a través del que se efectúa la radicación de varias de ellas.

Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos al Despacho que tenga en cuenta que la radicación de las facturas se efectuó a través de relación de envío y, en consecuencia, el sello de radicación fue impuesto por la parte demandada en dichos documentos.

En relación con las facturas FH1019326 y siguientes, su constancia de radicación se encuentra en los documentos denominados “CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN AL PROCESO DE AUDITORIA INTEGRAL” que corresponde a un documento expedido por NUEVA EPS S.A., en donde se puede establecer el número de documento que corresponde al número de factura y su estado en donde se señala “radicada” y el número de radicado....”

Luego, de las explicaciones dadas por el apoderado de la parte demandante, se tiene que la forma de radicación de las facturas aportadas con la demanda, se efectuó a través de documentos denominados “relación de envío”, que corresponde a un documento que relaciona varias facturas y en el que la EPS impuso el sello que da cuenta de su radicación y respecto de otras facturas se expidió el documento denominado “CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN AL PROCESO DE AUDITORIA GENERAL”, en donde constata el número de la factura radicada, la fecha de radicación y su valor, es a partir de la

fecha de radicación que inicia el computo de los treinta días para cancelar el valor allí inserto, vencidos los cuales empezarán a generarse intereses de mora, tal y como lo indicó la parte actora en las pretensiones relacionadas en el escrito de demanda relacionadas desde el nro 1 hasta el 1126, y que se constató desde el mismo libelo genitor, es decir, desde el escrito de demanda la parte demandante hizo las aclaraciones respectivas, las mismas que encuentran respaldo en los anexos aportados.

6. Ahora, en lo que respecta al requisito pedido en el numeral 3° de la demanda, es importante precisar que la parte demandante conforme las directrices trazadas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, presentó la demanda en mensaje de datos, acompañándose de los anexos de manera digital, para lo cual dicha parte expuso:

“...Habida cuenta que el Decreto Legislativo No 806 del 4 de junio de 2020, mediante el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, en su artículo 6° permite la presentación de la demanda y sus anexos en medios digitales, le informo que el escrito, las pruebas, los anexos y las medidas cautelares de la presenta demanda se encuentran a disposición del despacho judicial, en el siguiente

enlace:
https://arriguimy.sharepoint.com/:f:/p/omorales/ErK5dGH7JUtBitkXfxe_mocBplZzwf9oZtp8KWL_VJgPzg?e=7vSGt1...”

Accediendo a dicho link se puede ver que las facturas obrantes en documentos digitalizados y en pdf aportados como anexos a la demanda, y las físicas radicadas con el escrito de subsanación, se encuentran en el mismo orden señalados en los hechos y pretensiones de la demanda, y si bien el expediente digital se dificulta un poco más para su estudio, nunca podrá ser causal de

inadmisión el hecho que el expediente no se encuentre organizado, ni mucho menos conllevar a un rechazo de demanda, máxime cuando el trabajo virtual ha sido novedoso tanto para usuarios, como para funcionarios de la Rama Judicial.

7. Vistas así las cosas, se tiene que proceder de la forma como lo hizo el *a quo*, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “*summus jus, summa injuria*”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad demandantes, se itera, el respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un «*excesivo ritual manifiesto*» que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA el proveído objeto de apelación por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar dispone, que el juez a quo proceda a librar mandamiento de pago sin tener en cuenta las

exigencias requeridas en el auto recurrido, y además resuelva lo pertinente a la procedencia o no de la medida cautelar pedida.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:

Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f96d99187dd3a6f4d8df79e80fb9d0a7942e6595cc1548c63a97cc
d856da6998

Documento generado en 06/09/2021 06:12:37 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>